

# LAS JORNADAS DE PROTESTA DE LOS AÑOS 1983 - 1984

## La marginalidad urbana santiaguina y el conflicto social

MARIA EUGENIA MORALES DE FRASER\*

### INTRODUCCION

En los países de América Latina, desde hace ya varios años, se reconoce como a uno de los principales escollos para ingresar al mundo del desarrollo, la persistencia de un sector poblacional mayoritariamente pobre, que constituye un lastre para toda la sociedad, y que hasta ahora ha sido imposible de eliminar.

Su misma condición de necesidad, afirman los investigadores del tema, los hace exigir productos que los sistemas políticos de los países no están en condiciones de procesar; todo lo cual origina focos de conflicto social latentes o manifiestos, llegando a expresarse con violencia, e incluso con terrorismo.

En Chile, la lucha contra la pobreza ha sido preocupación fundamental de los gobernantes sin excepción. Y aun habiéndose logrado avances objetivos y perfectamente mensurables en áreas específicas, las demandas de los más pobres continúan, y lejos de disminuir, parecieran ir en aumento.

La cuantificación del universo y la formulación de estrategias para erradicar a la extrema pobreza es un problema que requiere de prioritaria solución, pero también de una decidida voluntad política para afrontarlo.

Los pobres no pueden seguir siendo considerados únicamente como el tema favorito del discurso electoral, para que una vez realizadas las elecciones se les entreguen como paliativos soluciones parciales, que no resuelven en definitiva su condición marginal.

Lo verdaderamente importante, desde el punto de vista político, es reconocer que este sector deprivado es una carga que debe soportar toda la sociedad, y que está constantemente presionando al sistema político en torno a sus demandas, generando así tensiones sociales cuyos alcances y desenlace realmente desconocemos; pero que sí estamos seguros, sus consecuencias no contribuirán de ninguna manera a mantener la paz social del país.

La capital de Chile, denuncia la prensa del año 1983, se muestra durante las

\* Magister en Ciencia Política, Mención Teoría Política, U. de Chile.

jornadas de protesta como una urbe semiparalizada. Se advierte ausentismo laboral relativo, baja asistencia de alumnos a los establecimientos educacionales, escasa concurrencia de madres y niños a las policlínicas, disminución importante de la circulación de locomoción colectiva, y muy poco movimiento en el comercio y en las actividades bancarias.

Pero ya desde las primeras horas de la noche, comienza a crearse un clima de efervescencia en las poblaciones marginales, caracterizado por expresiones violentas en contra del gobierno militar. Se levantan en las calles barricadas ardientes, se producen incendios, destrucción de bienes públicos y de uso comunitario; pero lo que es más grave, hay lesiones y muerte de personas.

Visualizamos un área de conflicto social importante, cuyos orígenes e implicancias se desconocen, y que constituye el llamado fenómeno PROTESTAS.

Desde comienzos de 1982, cúpulas sindicales primero y políticas después, llaman a la población a protestar en contra del gobierno del presidente Pinochet. Esto ocurre sistemáticamente una vez al mes, y la convocatoria se difunde mediante abundante publicidad radial, entrevistas de personeros de oposición en medios de prensa, y una profusa distribución de panfletos en todos los barrios santiaguinos.

La población santiaguina responde movilizándose. En cuanto a las manifestaciones concretas de adhesión dice la prensa, éstas son más masivas dentro de los sectores más pobres que en otros. También los pobres actúan con mayor agresividad, demostrando violencia y vandalismo asociados.

¿Por qué esta violencia comienza a exteriorizarse solamente a fines de 1982, en circunstancias que el gobierno militar permanecía ya diez años en el poder?

Si uno de los objetivos prioritarios y permanentes del Gobierno desde su instauración, fue el de erradicar a la extrema pobreza, ¿por qué esta protesta es particularmente violenta dentro de los más pobres?

Estas y otras interrogantes surgieron como motivación para estudiar el fenómeno, además del compromiso personal de esta investigadora en el trabajo profesional permanente con los grupos más deprivados de la población.

Esta percepción del problema, y ahora en el contexto de la Ciencia Política, busca aproximar a un punto de encuentro, la relación entre el efecto de la política social llevada a cabo por el gobierno militar chileno, y la actitud política del grupo marginal receptor.

Las preguntas directrices iniciales, condujeron a la formulación de tres hipótesis de trabajo, que guiaron el desarrollo de la investigación:

1. Si las expresiones de protesta registradas durante los años 1983 y 1984, y que involucraron a los grupos marginales en Santiago de Chile, obedecían a una demanda concreta por participación política.
2. Si dichas expresiones pretendían llamar la atención del sistema político, en orden a obtener mejoramientos económicos y sociales para el sector marginal.
3. Si sin excluir las posibilidades anteriores, el grupo marginal era un conglome-

rado intrínsecamente revolucionario, y buscaba obtener un cambio estructural de la sociedad.

Se plantea entonces una investigación descriptiva, apoyada en documentos de prensa de la época, publicaciones oficiales del Gobierno, recopilación de antecedentes obtenidos de observaciones directas, y bibliografía especializada en el área de conflicto social y de las teorías de la modernización.

El universo de estudio lo constituye Santiago de Chile durante los años 1983 y 1984, específicamente el sector poblacional calificado como marginalidad urbana.

## I. MARCO CONCEPTUAL BASICO

El primer concepto para analizar es MARGINALIDAD. Veinte años atrás, DESAL (1) publica una serie de estudios en que se sustenta la tesis que en América Latina existe un sector mayoritario de población, que vive en condiciones de extrema necesidad, y que se encuentra segregado del conjunto social.

Su existencia data desde la conquista española, cuando una vez concluida la lucha armada con la victoria del conquistador, la fuerza y el arraigo de las culturas nativas habrían determinado la persistencia de una dualidad cultural, la cual, según DESAL, está vigente hasta nuestros días.

La vigencia de esta dicotomía se manifiesta por ejemplo en las características del mestizaje, habiendo comprobado empíricamente DESAL que la pigmentación de la piel es más oscura a medida que se descende en la escala social.

Otro reflejo es la llamada yuxtaposición ecológica. En una misma ciudad, existe un sector mayoritario de conglomerados marginales muy pobres, quienes probablemente emigraron desde el campo en busca de mejores expectativas que no obtuvieron, frente a una minoría rica y educada, que ha adoptado el estilo de vida de los países desarrollados, y la que DESAL llama "herodianos".

El reflejo político de esta dualidad resulta el más importante para nuestro estudio. DESAL postula que al encontrarse los marginales escindidos de la sociedad, no hay una definición global en cuanto al Bien Común; es decir, no hay CONSENSO acerca del proyecto social de desarrollo.

Al no haber integración, se desconoce el objetivo a alcanzar frente a los elementos que constituyen la estructura y el quehacer de la sociedad; todo lo cual evidencia que el grupo marginal constituye un foco potencial de distintos grados y gamas de conflicto social.

Lewis Coser (2), en su libro *Las Funciones del Conflicto Social* citando a

- (1) DESAL: "Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina, Santiago de Chile". *Población y Familia en una Sociedad en Transición*, Ediciones Troquel, Buenos Aires, 1970. Páginas 25 a 112.
- (2) Coser, Lewis A.: *Las Funciones del Conflicto Social*, México-Buenos Aires, 1961. Fondo de Cultura Económica, primera edición en español. Páginas 62 a 63.

Simmel, reconoce un impulso de hostilidad primaria en los hombres, pero agrega que el surgimiento del conflicto requiere de la interacción de los individuos.

El autor Torcuato Di Tella (3), en su texto *Sociología de los Procesos Políticos*, distingue grados de interacción en cuanto a movilización social y política.

El primero de ellos supone la existencia de varios grupos deprivados, en cuanto a bienes o privilegios que ellos consideran legítimos de disfrutar. Estos grupos, superando un estado de pasividad e indiferencia frente a su carencia, adquieren conciencia de sus problemas, pero sin tener diametralmente claros sus objetivos. Este es el nivel de movilización social.

Posteriormente, estos mismos grupos, por acción de uno o de varios líderes, demandan participación en las decisiones autoritarias, lográndose así el grado de movilización política. Este nivel comportará o no amenaza para la estabilidad del sistema político imperante, en la medida que éste pueda procesar las demandas.

## II. ANALISIS ECONOMICO

Para fines de este estudio, se ha situado la política económica del gobierno militar en el marco teórico de Friedrich Hayek (4), destacado economista y filósofo contemporáneo, Premio Nobel de Economía en 1974.

Este autor es partidario del liberalismo puro, y defiende a la sociedad de mercado y al principio de subsidiariedad del Estado. Postula mantener el gobierno al mínimo, y reconoce la existencia de “un orden espontáneo de las actividades humanas”, originado a partir de reglas universales de conducta que protegen el dominio privado de los individuos.

Este orden, dice Hayek, es mucho más complejo y eficaz que si se hubiese construido deliberadamente y descansa en el mercado, lugar donde se concilian los diferentes intereses para beneficio mutuo de todos los miembros de la sociedad (sentido de reciprocidad).

Podemos señalar, entonces, que de acuerdo a su Declaración de Principios formulada en 1974, el gobierno militar chileno se encauzó en esta línea, otorgando particular atención al ejercicio del rol del Estado subsidiario hacia nuestra población objetivo; y también enfatizando el proceso de institucionalización tratando de perfeccionar el sistema económico vigente, tanto a objeto de operacionalizar el sistema económico de libre mercado al que adhería, como también intentando asegurar su permanencia en el tiempo.

(3) Di Tella, Torcuato S.: *Sociología de los Procesos Políticos*, Buenos Aires, 1985. Colección de Estudios Políticos y Sociales, primera edición. Páginas 118 a 119.

(4) Israel Zipper, Ricardo: *Democracia y Liberalismo*, Serie de Cuadernos de Ciencia Política de la Universidad de Chile. Santiago de Chile, Cuaderno N°7, junio de 1984. Páginas 12 a 34.

Para analizar el período que nos interesa, es necesario remontarse a 1981. En este año, la situación de bienestar económico mundial, comienza a verse afectada por una recesión internacional, la cual se prolonga mucho más allá de lo esperado.

Ante esta situación, el gobierno militar respondió con una política monetaria de cambio fijo, esperando que las otras variables se autoajustaran, hecho que en la práctica no ocurrió. Unido a lo anterior, la apertura al comercio exterior practicada desde los inicios del Gobierno, permitió que los chilenos accediesen a bienes de consumo que elevaron su estándar de vida, pero a costa de su endeudamiento.

Al mismo tiempo, en el nivel internacional, la profusión de créditos externos también determinó altos niveles de endeudamiento para el país. Todos estos factores determinaron que, en 1982, el crecimiento del producto nacional cayera en un 14%, en circunstancias que lo esperado era un crecimiento entre el 0 y el 2% (5).

A mediados del 82, recién el Gobierno abandona su postura rígida que ya había dejado secuelas, y maneja el valor del dólar, lo que significó frenar las importaciones y aumentar relativamente las exportaciones, unido a una aparentemente buena negociación con el Fondo Monetario Internacional conducida por el biministro Rolf Lüders. Pero, enero de 1983 trae consigo la decisión gubernamental de intervenir la Banca, tratando de obtener por esta vía un saneamiento del sistema. Pero lo que verdaderamente ocurrió, fue que esta medida originó desconfianza internacional hacia la economía chilena, disminuyendo la inversión extranjera al mínimo.

En 1983 continuó, en el plano económico, una actitud dinámica por parte del Gobierno, lo que, junto al resurgimiento económico de Estados Unidos, contribuyó a recuperar la confianza de inversionistas extranjeros en el país.

Sin embargo, estos efectos reactivadores no fueron perceptibles para el ciudadano común, y el impacto de la crisis golpeó con más fuerza a los sectores tradicionalmente más deprimidos, sobre todo en términos de desempleo. La misma situación se mantuvo durante 1984.

Como corolario de la coyuntura económica del período objeto de esta investigación, podemos decir que:

- La población sufrió los efectos de la crisis a nivel familiar, profesional, empresarial, etc., en términos de fuerte caída en los ingresos.
- Por la vía del rol subsidiario del Estado, éste prácticamente asumió a un alto costo económico la subsistencia de los grupos más deprivados, fortaleciendo la red social de Gobierno.
- Pero el Estado cumplió con este rol de subsidiariedad en forma excluyente para la población catalogada en extrema pobreza. Por tanto, los otros estratos sociales que obviamente también sufrían los efectos de la recesión, debieron enfrentar la situación por sí mismos.

(5) Revista Ercilla N° 2494. Semana del 18 al 24 de mayo de 1983.

Esta postura del Gobierno generó altos niveles de descontento fundamentalmente en la llamada clase media, quienes al quedar desempleados y sin ingresos, se vieron en la obligación de liquidar bienes para poder subsistir. Este es el caso por ejemplo, de los remates de vivienda a deudores hipotecarios morosos, ordenados ejecutar por los Bancos.

### III. ANALISIS SOCIAL

Para asignar los beneficios de la política social, llamada Red Social de Gobierno, se aplicó un instrumento de fichaje familiar en terreno, que mediante el cruce de variables vivienda, equipamiento y hacinamiento, obtenía rangos de puntaje que permitían determinar índices familiares, para calificar a los encuestados en tramos de extrema necesidad.

Con esta metodología se elaboró el primer Mapa de la Extrema Pobreza en 1974 (6), ejecutado por ODEPLAN y la Universidad Católica, que determinó que el 21% de la población vivía en condiciones de pobreza extrema, identificando y localizando geográficamente a todos los encuestados.

En 1982 (7), los mismos organismos, reactualizaron la información con idéntica metodología, obteniendo que solamente el 11% de la población estaba en situación extrema. Es decir, el nuevo diagnóstico permitió establecer que en el lapso de ocho años, más de 350.000 personas dejaron de estar catalogadas en rangos de extrema pobreza.

Los objetivos fundamentales de esta política social, tendían a lograr la erradicación de la extrema pobreza, y a promover una efectiva igualdad de oportunidades. Para dar cumplimiento a lo propuesto, el Gobierno asumió sostenidamente la destinación de fondos del gasto fiscal a gasto social, desde un 27% que se destinaba en 1973, a un 65% en 1985 (8).

Dentro de los programas sectoriales, el de mayor éxito fue en el área de vivienda. Durante los años 83 y 84, se logró una cobertura real del 34% de la población objetivo. Es decir, 32.690 familias en extrema pobreza lograron solución habitacional definitiva (fuente Ministerio Viv. y Urb.).

En el sector Educación, se aplicó la política de descentralización administrativa, entregando esta responsabilidad a las municipalidades con el fin de optimizar recursos y de obtener soluciones ágiles para los problemas locales. Asimismo, se

- (6) Kast Rist, Miguel y Molina Silva, Sergio: *Mapa de la Extrema Pobreza en Chile 1974*. Publicación conjunta de ODEPLAN y el Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile, 1976.
- (7) Mujica Arteaga, Rodrigo y Rojas Pinaud, Alejandro: *Mapa de la Extrema Pobreza en Chile 1982*. Publicación conjunta de ODEPLAN y el Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, marzo de 1986.
- (8) Secretaría de Desarrollo y Asistencia Social. República de Chile. *Chile. Estrategias y Políticas de Desarrollo Social*. Santiago de Chile, noviembre de 1986. Pp. 2 y 17.

implementó el sistema de subvención estatal por alumno asistente, lo que permitió la incorporación del sector privado a la función educadora. El rol normativo y contralor lo mantuvo el Ministerio de Educación.

Por otra parte, y para favorecer directamente a la extrema pobreza, se aumentaron en los establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados las raciones alimenticias del Programa de Alimentación Escolar; y también se crearon nuevos establecimientos de atención prebásica, tales como Jardines Infantiles y Centros Abiertos.

En el sector Salud, también son los años de la descentralización administrativa y del traspaso de establecimientos de atención primaria a los municipios.

En cuanto al sector marginal, la población previamente calificada en rangos de pobreza tenía gratuidad para todos los niveles de atención en salud, pero observamos que la obtención real de las prestaciones fue muy dificultosa.

En la atención primaria, por ejemplo, los consultorios mostraban deficiencias en infraestructura, equipamiento y personal. El público concurría a solicitar atención médica desde tempranas horas de la mañana, y debía esperar largo tiempo para recibirla. En el nivel secundario, por su parte, obtener una cama para hospitalización o una consulta de especialista, podía demorar incluso algunos meses si no constituía una urgencia médica.

Esta dificultad generó una demanda constante por parte del grupo marginal hacia las autoridades comunales, la cual obtuvo como respuesta la adopción de algunas medidas paliativas, pero no pudo atacarse el problema a fondo por falta de recursos presupuestarios. En el nivel secundario, no se observaron cambios frente a las demandas.

Dentro del área de salud, el logro más importante del período en estudio es sin duda el descenso de la mortalidad infantil. En el año 1980, la tasa chilena era del 79 por mil, y en 1983 descendió al 21 por mil. Esta cifra, comparable a la de países desarrollados, tiene gran importancia, por cuanto este indicador es considerado uno de los parámetros de mayor significación para medir el desarrollo de un país (9).

Al respecto, es preciso agregar que en este esfuerzo participaron instituciones privadas que aportaron importantes recursos humanos y materiales, además de la contribución estatal. El nivel alcanzado se obtuvo en realidad gracias a la aplicación de programas conjuntos, dirigidos hacia las distintas dimensiones del problema de la mortalidad infantil, y que a la fecha de nuestro estudio ya llevaban más de veinte años de aplicación.

El descontento creado en el grupo marginal por el difícil acceso a las prestaciones de salud, unido a la inestabilidad laboral del personal traspasado de los consultorios, constituyeron focos permanentes de reacciones contrarias a la gestión del gobierno militar en esos años.

(9) *Op. cit.: Chile, Estrategias y Políticas de Desarrollo Social*. P. 25.

Esta misma reacción la observamos también en el profesorado, advirtiéndose demandas que determinaron presión política hacia el Gobierno, organizadas desde el Colegio de Profesores. Se producen las primeras protestas formales por exoneraciones de maestros y el cierre de algunos establecimientos educacionales, producto de la reestructuración comunal que debió aplicarse para tratar de compatibilizar la subvención entregada a cada Municipalidad, con los gastos reales que demandaba el proceso educativo.

Finalmente, cabe señalar que no es factible evaluar cualitativamente la política de traspasos de administración en educación y en salud, por cuanto en el bienio estudiado, éstos se encuentran recién en fase de implementación.

En relación a los subsidios y beneficios otorgados a través de la red social a la población más necesitada, vale decir, que éstos tenían el carácter de acumulativos. De esta forma, varios miembros de una familia podían recibir, cada uno, varios subsidios en aportes monetarios directos; tales como asignaciones familiares, pensiones asistenciales, y subsidios de trabajo; a los cuales es necesario sumar otros concebidos en especies y en servicios, como son alimentación escolar y complementaria, ayudas en elementos de vestuario y de construcción, prestaciones de salud y de educación, actividades deportivo-recreativas, etcétera.

Lamentablemente, no hay evaluación precisa durante este período del carácter acumulativo descrito; aun cuando nos consta que la modalidad se aplicó concretamente, y con especial énfasis durante el período que nos interesa.

#### IV. ANALISIS POLITICO

##### 1. *Situación coyuntural del período*

En los años 1983 y 1984, se encuentran presentes factores políticos, económicos y sociales, que gravitan en las actitudes políticas observadas.

En primer término, está plenamente vigente el receso político impuesto por el gobierno militar desde que asumió en 1973. No hay legislación que regule la actividad política; por tanto no existen partidos ni tampoco dirigentes oficiales.

Como segundo factor relevante, destaca el severo impacto que produjo en la población chilena la recesión económica mundial de 1981. Aun cuando en 1983 comenzaron a advertirse los primeros signos reactivadores a nivel macroeconómico, éstos no eran perceptibles para el ciudadano común. Las consecuencias de esta crisis golpearon con mayor dureza precisamente a los sectores más desposeídos, alcanzándose elevados niveles de desempleo que ocasionaron la correspondiente caída de los ingresos, agravando la situación de pobreza de arrastre.

El tercer elemento gravitante del período lo constituye la acción social del Gobierno en favor de la extrema pobreza, concebida dentro del rol del Estado subsidiario. Los programas venían aplicándose, desde 1974, a través de una



compleja red de subsidios y beneficios focalizados hacia la población técnicamente calificada en tramos de pobreza.

En 1983 esta red se amplió intentando paliar algunos de los efectos de la crisis económica existente, con el objetivo concreto de tratar de asegurar a los más pobres, un piso mínimo de subsistencia.

## 2. *Participación e integración del sector marginal*

Durante el bienio estudiado, en la marginalidad urbana santiaguina no hubo participación ni integración, desde el punto de vista activo. Esto significa que ellos participaron únicamente en forma pasiva de algunos de los bienes materiales que les proporcionó el Estado, pero no hay ningún elemento que permita señalar que lograron materializar el aporte que de ellos se esperaba, en términos del Bien Común.

Tampoco hay intentos de obtener su participación activa por parte del Gobierno. Las organizaciones del período, formalmente instituidas para representar inquietudes comunitarias, carecían de respaldo de las bases, por cuanto los dirigentes no eran electos por sus pares, sino designados por la Autoridad. El tratamiento de peticiones emanadas del sector marginal que nos interesa, se realizaba exclusivamente por esta vía, desconociéndose si realmente las inquietudes que ellos presentaban a las autoridades eran realmente las más importantes de resolver en opinión de las comunidades.

Este mecanismo derivó la participación marginal hacia otras instancias no formales, las cuales lograron generar la movilización del sector mediante la acción de líderes pertenecientes a distintos estamentos, tales como sectores políticos, sindicales, y miembros de la Iglesia Católica.

Esta última resultó ser el ente movilizador más importante en relación al grupo marginal santiaguino. Durante los dos años del período en estudio, se registró abundante información de prensa referente a la acción sostenida de sacerdotes católicos al interior de sus comunidades poblacionales, creando conciencia colectiva entre los pobladores de su condición deprivada, organizando grupos de opinión y de presión. En este contexto destaca, entre otras, la importante movilización lograda en la población La Victoria, donde se advierte el liderazgo definido del sacerdote francés André Jarlan, fallecido en 1984 (10).

La carencia de vías instituidas de participación, permite explicar la constante de violencia presente en los actos de protesta marginal. Considerando su bajo nivel cultural, su falta de comprensión frente al proyecto de desarrollo del país, y la conciencia de deprivación colectiva adquirida, era obvio que la expresión a través de las vías informales fuera especialmente violenta en contra del sistema que no les permitió dar a conocer sus inquietudes.

(10) Revista Ercilla N° 2563. Semana del 12 al 18 de septiembre de 1984.

Ahora bien, estas instancias informales no pudieron lograr un buen manejo de los niveles de tensión generados al interior del grupo marginal, ni tampoco fueron capaces de elaborar y de canalizar adecuadamente sus demandas. Estimamos que las razones de esta incapacidad radican en la falta de institucionalidad de las organizaciones; lo que por una parte supone una base estructural muy rudimentaria, con muy pocas personas dedicadas al trabajo directo de obtener movilización; y por otra parte, supone escasas posibilidades de acceder con éxito al sistema político.

Por estas razones, en 1983 y 1984 se desborda un verdadero torrente reprimido de participación popular, carente de mecanismos de regulación. Esta situación complicó a la cúpula dirigente, obligándola a desechar la movilización obtenida, ante la incapacidad de controlar las consecuencias de su expresión.

### 3. *Actitud política del sector marginal frente a la política social del gobierno militar*

Al estudiar la actitud política del sector privado santiaguino frente a la política social del Gobierno, obtuvimos que, en general, los marginales percibían los beneficios en forma absolutamente pasiva e indiferente. Ellos desconocían el proyecto de desarrollo social en que se encontraba empeñado el Gobierno y que los involucraba directamente. Es más, observamos indiferencia recíproca entre el Gobierno como ente proveedor, y los marginales como receptores.

Esta investigadora estima que la falta de identificación política de los marginales con el Gobierno del período, se debió a una excesiva tecnificación del sistema, tanto para identificar a los potenciales beneficiarios, como para asignarles los subsidios.

Tanta objetivización, estimamos que condujo a la pérdida de la dimensión personal y sobre todo humana de la pobreza, reduciéndola a grandes universos de problemas impersonales y técnicos, independientes unos de otros, y cuyas consecuencias políticas podemos agrupar en dos áreas:

- a) El propio gobierno militar perdió de vista el enfoque integral para abordar la erradicación de la extrema pobreza. De esta forma, se otorgaron soluciones parciales que mejoraron con éxito una u otra situación de privación del conjunto; como por ejemplo, que el 35,04% de las familias que en 1982 fueron calificadas en extrema necesidad, a fines de 1984 habían obtenido solución habitacional definitiva, lo que constituye sin lugar a dudas un logro realmente valioso (Informe Social ODEPLAN 85).

Pero, no obstante lo anterior, no se alcanzó el cumplimiento de los fines últimos propuestos por el Gobierno en su Declaración de Principios publicada en 1974, en términos de obtener desde todos los sectores participación e integración, en torno a una concepción subsidiaria y objetiva de Bien Común.

- b) También, por exceso de tecnicismo, estimamos que el Gobierno se negó a sí mismo la posibilidad de generar vínculos de adhesión políticos con la pobla-

ción marginal. Es decir, no capitalizó esta sostenida asignación de recursos para generar apoyo en su favor, y poder contar con los sufragios de los más desposeídos cuando llegara el momento de definir su suerte en las urnas electorales.

#### 4. *Evolución de las jornadas de protesta*

Las protestas comienzan como un CONFLICTO REAL, donde existen demandas concretas y conducción política coherente (11).

El liderazgo en primera instancia es de origen sindical, para dar paso posteriormente a la dirección de un conglomerado opositor, estructurado como cúpula política, integrada por antiguos y conocidos dirigentes procedentes de ex partidos políticos, cuyo elemento de consenso básico es el rechazo al gobierno militar.

Se conformó así la Alianza Democrática, elite que logró articular y presentar demandas concretas al sistema político, en orden a reimplantar, en el menor plazo posible, la democracia como forma de vida social y política. Así, se plantearon la creación de una asamblea constituyente para reformar la Constitución de 1980, y la instalación inmediata de un Gobierno de transición integrado por personeros ajenos al régimen militar.

Con el transcurrir del tiempo, aproximadamente a partir de mediados de 1983, la escalada violentista asociada a las acciones de protesta aumenta hasta convertirse en una situación incontrolable para sus gestores. De esta forma, la dimensión eminentemente política de las jornadas se va desdibujando progresivamente, y los conductores las desestiman como método válido de presión, por cuanto no desean asumir la responsabilidad de los altos niveles de violencia desatados.

Posteriormente, y al carecer las jornadas siguientes de conducción política, van perdiendo adhesión, y descienden también progresivamente las expresiones de violencia. En este momento, la protesta se ha transformado desde el punto de vista político, en un CONFLICTO IRREAL.

En forma paralela a la acción opositora descrita, el entonces Ministro del Interior don Sergio Onofre Jarpa Reyes, condujo las negociaciones políticas por parte del Gobierno. Vale aquí destacar esta gestión personal, por cuanto recordemos que el oficialismo carecía de un sector de apoyo político estructurado y, por lo tanto, no había movilización social ni tampoco dirigentes políticos que respaldaran su gestión públicamente como en el caso de la oposición.

Comenzó el ministro Jarpa el proceso de apertura democrática con la oposición, avanzando en la obtención de algunos puntos de consenso fundamentales. Primero, el gobierno militar acepta a los dirigentes de la Alianza Democrática

(11) *Op. cit.: Las Funciones del Conflicto Social*. Pp. 54 a 69.

como interlocutores válidos en el plano político; y segundo, el oficialismo asume el compromiso de acelerar el estudio y la promulgación de las leyes políticas.

La confluencia de ambos factores actuaron eficientemente en términos de Ciencia Política, como objetivos sucedáneos. Aun cuando las demandas concretas que formuló la Alianza Democrática al gobierno militar no fueron satisfechas, el sistema político reaccionó aportando estos dos elementos proporcionados por el ministro Jarpa, los cuales se comportaron como verdaderas válvulas de seguridad, en el sentido que permitieron que el sistema pudiera liberar la presión acumulada sin amenazar su estabilidad.

##### 5. *Evaluación política de las jornadas de protesta*

La conclusión de este estudio es que las protestas obedecieron a una demanda concreta por participación política, pero donde también subyace una solicitud de reivindicaciones socioeconómicas. Pero ambas demandas emanaron desde distintos estratos, y no son privativas del sector marginal.

Es así como observamos manifestaciones de adhesión francas y permanentes por parte de la clase media santiaguina, demostrando activa participación en actos localizados en el sector Oriente de Santiago durante las jornadas de protesta. Eso sí, estas expresiones carecieron del factor violentista asociado como ocurría en el sector marginal.

Concluimos, también, que la marginalidad urbana santiaguina obtuvo un importante grado de movilización social, pero no logró el nivel superior de movilización política. Por tanto, desestimamos de plano que nuestra población objetivo en esas circunstancias fuera un conglomerado intrínsecamente revolucionario, que pretendiera obtener un cambio estructural de la sociedad.

No obstante lo anterior, la presencia marginal en las jornadas de protesta constituyó un elemento capital para ejercer presión eficaz. Si no se hubiesen dado los niveles de movilización registrados, probablemente la acción política pura no hubiese resultado suficiente para impactar al sistema político y a la opinión pública.

Afirmamos, entonces, que las protestas fueron un éxito en términos de haber logrado materializar apertura política frente a un gobierno militar que durante diez años había vedado toda participación en esta área; y aún más, había descalificado pública y sistemáticamente toda actividad relacionada con el quehacer político.

Fundamentamos la afirmación anterior, señalando que el largo período de receso político imperante desde hacía ya diez años, unido a la vocación democrática históricamente demostrada por el pueblo chileno, y la grave situación económica recesiva del período, hicieron aflorar en los actores de la época un sentimiento agudo, al que hemos llamado "de marginalidad política", que los indujo a movilizarse activamente tanto a nivel social como político, exigiendo respuestas al sistema frente a sus demandas.

Lamentablemente, junto con el cumplimiento de los objetivos políticos debe asumirse el alto costo que significaron la violencia y el vandalismo asociados. Pero, aun cuando estamos seguros que ni los dirigentes políticos, ni el Gobierno, ni tampoco el país deseaban la presencia de estos elementos, no podemos negar que ellos aceleraron el proceso de toma de conciencia en las Autoridades de Gobierno, para comprender y aceptar la necesidad urgente de crear vías de participación, e intentar así tratar de disminuir los niveles de tensión social registrados.

## CONSIDERACIONES FINALES

Los factores coyunturales de la época analizada, obviamente predisponían a una situación de conflicto social. Y a través de este estudio hemos comprobado empíricamente dos hechos fundamentales:

1. Que la participación en los grupos deprivados, aun cuando no se estimule, se mantiene latente.
2. Y que cuando esta participación surge en situaciones de represión política, se manifiesta en forma esencialmente violenta.

Por tanto, tratar de limitarla manteniendo canales de participación inoperantes, no contribuyó de ningún modo a evitar el conflicto social. Por el contrario, el hecho de que la autoridad ignorara el sentir del grupo marginal, permitió que los más pobres acumularan progresivamente tensiones, que de haber sido conocidas por el Gobierno, tal vez hubiesen podido tratarse oportuna y adecuadamente, evitando los alcances violentistas conocidos.

Además de la demanda por participación política, se evidenció también insatisfacción de los marginales frente a las soluciones entregadas por los programas sociales. Aquí confluyen varios elementos: el desconocimiento del fin último, visiones parciales y subjetivas de los problemas, o simplemente pasividad e indiferencia.

Todas estas apreciaciones obtenidas desde el sector más necesitado, fuertemente presionado en el período por la grave situación económica, nos demuestran su falta de integración al todo social, y la consiguiente falta de comunicación. Estimamos que esta separación fue todavía más acentuada por el exceso de tecnicismo para abordar la problemática social que aplicó el Gobierno.

Esta misma incomunicación impidió la construcción del consenso mínimo, elemento insustituible para poder mantener a la sociedad en un clima de tranquilidad, mientras el Gobierno se encaminaba hacia la consecución de las metas que se había propuesto en su proyecto de desarrollo.

Elaborar esta base consensual, requiere primero que la sociedad acoja solidariamente a todos sus miembros, educándolos en sus usos y en sus costumbres. Y creemos que la mejor alternativa para lograrlo, es mediante la opción por la democracia, como forma de vida social y política.

Es aquí donde tienen responsabilidades ineludibles las organizaciones sociales de base, los partidos políticos, y la autoridad gubernamental.

Las organizaciones sociales de base son la primera escuela para la vida democrática. Después de la familia, es en el seno de estos organismos donde los individuos interactúan en un proceso de socialización gradual y permanente, cuyo objetivo final es llegar a imprimir en las personas las conductas democráticas, a través del ejercicio práctico de la participación social.

En el Consejo de Curso, en el Club Deportivo, en el Centro de Madres y en el Club Juvenil del barrio, es donde se aprende el significado de las palabras consenso y discrepancia. Se trata de poder llegar a internalizar que la opción ganadora de un momento dado, no implica que quienes no la apoyaron deban someterse a un proyecto excluyente e intransable, tanto desde el punto de vista de los ideologismos como de sus propios sentimientos personales; sino que ésta constituye un camino distinto para lograr metas superiores, encauzadas dentro de un concepto de Bien Común objetivo y compartido por ambas partes.

Los partidos políticos verdaderamente insertos en la tradición democrática, por su parte, deben encargarse, mediante su discurso y su acción, de fijar en la población los valores permanentes de la democracia, y también de hacerles aprehendibles sus proyectos de desarrollo social y político.

Y la Autoridad política, a su vez, tiene el deber de crear, difundir, institucionalizar y, posteriormente, mantener y respetar las vías adecuadas de participación a nivel social y político.

Durante el período del gobierno militar Chile logró consolidar un sistema económico basado en la economía social de mercado, cuyo éxito en términos estrictamente económicos, es aceptado aun por los sectores más radicalmente opositores. Pero, sin embargo, no hubo un manejo adecuado de los problemas sociales, como se demostró en 1983 y 1984.

Los marginales no pueden continuar siendo meros receptores de esta u otra ayuda social. Esto es simplemente caridad mal entendida.

La meta del desarrollo exige del sacrificio y de la contribución de todos para alcanzarla, pero también es legítimo que a medida que se vayan cumpliendo etapas en este tránsito, se haga partícipe a la población de los beneficios. Para que esto último sea una realidad, es vital que la iniciativa la asuma el Estado, diseñando e implementando programas que apunten a la integración de los sectores marginados, para que sean capaces de comprender el proceso dentro del cual están insertos, y para que también aprendan a adaptar gradualmente su sistema de vida a la futura modalidad de país desarrollado.

Cuando empecemos esta tarea, habremos también comenzado la tarea para conquistar la libertad política. Cuanto antes partamos, mejor.